

PUBLICIDAD

Opinión

Los incendios demuestran que es urgente cambiar de modelo económico para resistir el cambio climático



Cristina Buhigas  



Varios bomberos forestales tratan de extinguir el fuego, a 19 de agosto de 2025, en Palacios de Compludo, León, Castilla y León - Fernando Otero / Europa Press

Deben prohibirse proyectos empresariales depredadores e invertir en recuperar población rural, volver a la ganadería extensiva o renaturalizar ciudades y costas, en lugar de gastar en armas

21/08/25 | 6:00

“**T**odos contra el fuego”, cantaba en 1990 Joan Manuel Serrat en un anuncio que concluía: “Tú lo puedes evitar”. El mensaje es similar al que se difunde 35 años después cuando arden cientos de miles de hectáreas de bosque, llevándose por delante vidas, propiedades, parques nacionales y patrimonio natural de la humanidad. Los héroes individuales nos salvarán, es la conclusión que puede extraerse de las informaciones televisivas y de las palabras del presidente del Gobierno al plantear un pacto de Estado incluyendo “a toda la sociedad” para adaptar España a la emergencia climática. Entonces y ahora el mensaje es falso. Los incendios de hoy, como los de antes demuestran que el fuego solo se apaga con dinero y decisiones políticas. El cambio climático nos está arrollando. Por eso es urgente

cambiar el modelo económico en España, Europa y el mundo, invirtiendo en el desafío a que se enfrenta la humanidad para sobrevivir: conservar el medio ambiente. Para ello, aunque sea positivo, no basta con instalar energías renovables; entre otras cosas, hay que renaturalizar costas y ciudades, recuperar población rural, volver a la ganadería extensiva e impedir que se pongan en marcha proyectos empresariales depredadores. Y, por encima de todo, debemos conseguir que se de marcha atrás en el rearme. Está claro que, con el panorama actual, resulta difícil ser optimista

Aunque a veces los inicie un rayo, los incendios no son inevitables como un terremoto o una erupción volcánica. Los que ahora padecemos, los llamados de sexta generación, son de gran intensidad, alteran la dinámica de las capas altas de la atmósfera, lo que los hace difíciles de controlar, y pueden generar tormentas de fuego que los retroalimentan y complican su extinción. Las altas temperaturas del cambio climático que no los causan, pero los favorecen. Apagarlos en una situación como la de este verano, con una gran masa de vegetación seca que creció por las abundantes lluvias de primavera, es prácticamente imposible aunque se utilicen los medios más avanzados, mucho menos por vecinos y

voluntarios. Todos los expertos científicos coinciden en que para evitarlos hay que revertir el abandono de los bosques y otros ecosistemas y construir paisajes resilientes, es decir, invertir en prevención, todo lo contrario de lo que se ha hecho en España.

La inversión pública, de Estado y comunidades autónomas para este concepto es actualmente la mitad que hace 13 años, en concreto 176 millones de euros en 2022 frente a los 364 millones de 2009, según un estudio de la Asociación Nacional de Empresas Forestales. A trabajos de reforestación, aprovechamiento de la madera o lucha contra plagas se dedica un 26% menos. En extinción se sigue gastando lo mismo, 417 millones de euros, una cantidad que tampoco parece suficiente con esta nueva clase de incendios. En un escenario político dominado por la imagen y el relato, las actuaciones a medio y largo plazo para una eficaz gestión forestal no parecen rentables.

La inversión pública para prevenir incendios es de 176 millones de euros anuales, mientras este año se

gastarán 32.000 millones en armamento

Es cierto que las competencias en la materia son de las comunidades autónomas, pero eso no significa que sus presupuestos no salgan de los impuestos que pagan los ciudadanos como la totalidad del gasto público. De los presupuestos generales del Estado se transfiere el dinero a las autonomías, por eso es legítimo comparar la exigua cantidad que se dedica a prevención y extinción del fuego con la que este mismo ejercicio de 2025 se destinará a la compra de armamento hasta alcanzar el 2% del PIB, unos 32.000 millones de euros. Para llegar al 5% del volumen total de la economía española que se firmó en la cumbre de la OTAN serían más de 80.000 millones al año.

Si Diario Red puede publicar lo que casi nadie más se atreve, con una línea editorial de izquierdas y todo el rigor periodístico, es gracias al apoyo de nuestros socios y socias.

Apoyar ahora

Pedro Sánchez no necesita ningún pacto de Estado con el PP para destinar más fondos a adecuar el territorio español a la emergencia climática, no solo puede legislar y buscar acuerdos en el parlamento, sino que tiene en las manos la capacidad de gestión presupuestaria mediante la transferencia o la ampliación de crédito. No olvidemos que en 2024 el Gobierno hizo modificaciones por más de 90.000 millones de euros con los presupuestos de 2023 prorrogados. Según la Intervención General de la Administración del Estado, se aumentó el gasto en 50.000 millones y más de 40.000 millones cambiaron de destino. Ante estas cifras las cantidades destinadas a gestión de los montes son irrisorias.

La subida de las temperaturas ya ha sobrepasado el objetivo de la Cumbre de París de 2016. Recordemos: se acordó reducir las emisiones causantes del cambio climático para mantener la temperatura media global en menos de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. Según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) la

subida de la temperatura ya está en al menos 2,7 grados. Esto quiere decir que todos los gobiernos mundiales o no han tomado las medidas adecuadas o han fracasado en su implementación. La emergencia climática es un hecho. España es el octavo de los países más afectados a nivel mundial, según el Global Climate Risk Index de la organización Germanwatch. Hasta 2023, en 30 años, fueron 27.000 las muertes vinculadas a catástrofes originadas por el calentamiento y 25.000 millones de euros las pérdidas económicas. Por delante de nuestro país están Dominica, China, Honduras, Myanmar, Italia, India y Grecia.

El riesgo de incendio en España no se debe solo a la escasez de gasto, sino a un modelo de crecimiento que ha generado despoblación y envejecimiento en las zonas rurales. En León, Zamora y Ourense, las tres provincias más afectadas por los últimos fuegos, la edad media de la población supera los 50 años y hay el triple de personas jubiladas que menores de 16 años. En los 33.415 kilómetros cuadrados de las tres provincias viven 925.654 habitantes, 28 habitantes por kilómetro cuadrado, una densidad de población por debajo de la tercera parte del conjunto del Estado. Según la Fundación BBVA, han

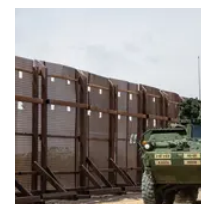
Autores de opinión

-- Seleccione un autor --

Noticias de hoy



**El franquismo
fusiló a José
Humberto Baena
como asesino, la
memoria lo
reivindica como
asesinado**



**EEUU pinta de
negro la valla
fronteriza con
México para elevar la
temperatura e**

perdido el 22,7% de la población en 40 años, mientras en todo el país el número de habitantes creció un 42,8%.

La despoblación es clave para que se queme el monte porque causa el abandono de la ganadería que evita la acumulación de biomasa. Un dato revelador: cada año cierran en España 1.550 explotaciones de ganado en régimen extensivo, según COAG, mientras crece una ganadería sin ganaderos, de macrogranjas



Diario Red

América Latina **España** **México** Internacional Editorial Opinión Medios Armas para pensar Cultura Canal Red

sus explotaciones.

El bipartidismo apoya planes de compañías multinacionales, extractivos y contaminantes que solo benefician a sus accionistas

Pero las empresas depredadoras y causantes del deterioro del medio ambiente no son solo macrogranjas, están en todos los sectores económicos y luchan para lucrarse hasta con el

impedir el paso de migrantes



Rusia celebra la "bofetada" de Trump a Zelenski y sus socios con el mapa de Ucrania con las zonas ocupadas

Apoyar

🌐 España ▼



Bolsa de Hong Kong



El CGPJ abre un expediente disciplinario al juez Peinado sabiendo que no puede

último resquicio de riqueza explotable en territorio español. Y el bipartidismo no les pone coto. Ya al final de su gobierno, Mariano Rajoy prorrogó la vigencia de la concesión de la papelera Ence, que lleva años contaminando las aguas de la ría de Pontevedra, hasta 2073. Se instaló en el franquismo, en 1959 y se tenía que haber desmantelado en 2018 porque está en una zona protegida por la Ley de Costas, pero el Tribunal Supremo dio la razón a la empresa en contra del movimiento ciudadano.

Al PP gallego no le bastó con esto, la Xunta promueve una macropapelera, en el centro de la comunidad. La empresa Altri, de capital mayoritariamente portugués, instalará una factoría de celulosa lindando con la Serra do Careón, en Lugo. Cada día extraerá 46 millones de litros de agua del río Ulla, al que devolverá 30 millones que, por calidad y temperatura, dañarán el sistema ecológico de la zona y de la ría de Arousa, gran productora de marisco. Junto al Camino de Santiago se instalará una chimenea de 75 metros de altura, que emitirá azufre, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y partículas. Necesitará 2,4 millones de toneladas de eucalipto, lo que llenará aún más terreno de este monocultivo que dañan la biodiversidad y aumenta el peligro y la virulencia de los incendios. La empresa quiso beneficiarse del PERTE de

**concluirlo antes de
su jubilación**

PUBLICIDAD

descarbonización de los Fondos Next Generation y el Gobierno socialista se lo negó en abril de este año, pero mantiene su plan y recurrirá a los tribunales. El ejecutivo no lo ha prohibido.

En Andalucía, el PSOE está fomentando otro proyecto empresarial depredador, la reapertura de la mina de Aznalcollar, que causó una catástrofe ambiental en 1998 por la rotura de una balsa con toneladas de lodos tóxicos. Es también una compañía extranjera, Grupo México la que pretende explotar los 45 millones de toneladas de minerales que quedan por extraer (zinc, cobre y plomo) durante 17 años, vertiendo millones de litros de agua contaminada al Guadalquivir. La anterior presidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz apoyaba el plan y el popular Juanma Moreno se ha apuntado a él alegremente, junto con UGT, CCOO e Izquierda Unida, coalición a la que pertenece el alcalde de Aznalcollar. El resultado será que los metales pesados se acumularán en la cuenca del Guadalquivir.

También corresponde a un gobierno socialista, en este caso de Asturias, decidir sobre el proyecto de una empresa australiana, que en su propio nombre, Black Dragon Gold, evidencia su naturaleza. Se trata de explotar la mina de oro de Salave, en Tapia de Casariego, concejo del occidente asturiano.

Lo más leído



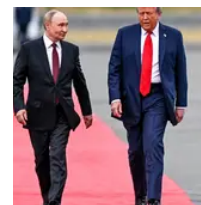
El Supremo ratifica la condena a El Confidencial por publicar los audios en los que Florentino Pérez dice que Ferreras es “su hombre”



La Taberna Garibaldi reabre el 15 de agosto en Lavapiés en un local más amplio



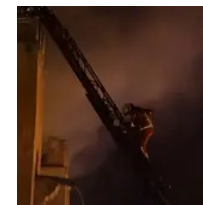
Las tijeras de Grbovic en la mayor batalla campal de la historia del Eurobasket



Cinco claves de la cumbre entre Donald Trump y Vladímir Putin

El ejecutivo de Adrián Barbón ha abierto el procedimiento para declararlo Proyecto de Interés Estratégico Regional. Ponerlo en marcha supondría la destrucción de las lagunas existentes donde estuvo el yacimiento que explotaron los romanos y la contaminación de la zona por el vertido de aguas al mar. El ayuntamiento de Tapia y los vecinos se oponen a la depredación, pero el proyecto se apoya en la ley de minas franquista. También el de Aznalcollar se fundamenta en legislación de la dictadura todavía en vigor.

Estos proyectos son solo una muestra, hay otros bajo el amparo de administraciones autonómicas y municipales, que en lugar de hacer frente en sus costas al alza del nivel del mar, recuperando sistemas dunares, emprenden macroproyectos, como la ampliación del puerto de Valencia, y en las ciudades del interior propician el enriquecimiento de las empresas constructoras creando hornos de hormigón y asfalto y talando arbolado, en vez de aumentar zonas verdes y crear refugios climáticos. En el actual sistema económico todos los niveles administrativos acaban al servicio de los intereses empresariales, por eso el sector de las energías renovables crece en manos de los intereses de las compañías energéticas y de la banca, no abaratando el consumo a los ciudadanos.



CGT revela que había un equipo preparado para retransmitir el incendio de la mezquita de Córdoba en Canal Sur pero la dirección decidió continuar emitiendo los toros

El abandono del modelo de crecimiento extractivo, que solo beneficia al gran capital y aumenta la desigualdad social debería realizarse, según científicos no adscritos a la economía neoliberal, por medio de un proceso de decrecimiento, tomando decisiones políticas que reorganicen la producción, reduciendo el uso de recursos naturales y de energía. Para Carlos Taibo, profesor jubilado de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid, autor de *En defensa del decrecimiento*, el discurso político y mediático actual margina la crisis ecológica y potencia “un darwinismo social militarizado” que recuerda lo que los nazis hicieron hace 80 años. La solución sería, según María José Bautista, de la UNED, un descenso equitativo de los rendimientos económicos sin afectar al bienestar: desacelerar la economía “disminuyendo el consumo de recursos y minimizando la generación de desechos”.

El papel de la ciudadanía ante los macroincendios, la despoblación, las empresas extractivas y las decisiones de todos los poderes políticos no es solo votar en consecuencia, que también. Como decía hace unos días un bombero forestal en la cadena SER, “cuando esto acabe, nos vemos en las calles”.



ETIQUETAS: Pedro Sánchez, cambio climático, bipartidismo, gasto militar, incendios



MEDIOS INTERNACIONAL CULTURA OPINIÓN CANAL RED

QUIÉNES SOMOS LEGAL POLÍTICA DE COOKIES POLÍTICA DE PRIVACIDAD

